



NOTA DE PRENSA

Perú profundiza retrocesos ambientales que ponen en riesgo el Acuerdo Comercial con la Unión Europea

Lima, 01.12.2025. Diversas organizaciones de la sociedad civil como parte del Grupo Consultivo del Acuerdo comercial con Unión Europea advirtieron hoy que el Perú está atravesando un **proceso sistemático y acumulativo de flexibilización de su normativa ambiental** que afecta la Amazonía, la gobernanza forestal, los derechos de pueblos indígenas y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo Comercial con la Unión Europea (AC-UE).

Durante un desayuno de trabajo con periodistas, especialistas de RedGE, MOCICC, DAR y Proética coincidieron en que estos retrocesos *“no son hechos aislados, sino parte de un patrón que debilita la capacidad del Estado para proteger el ambiente, fiscalizar actividades extractivas y combatir el crimen organizado vinculado a economías ilegales”*.

Micaela Guillén, coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), señaló que desde 2014 el país acumula normas regresivas que reducen estándares y limitan la fiscalización ambiental.

“La flexibilización ambiental no empezó hoy. La Ley 30230, los cambios al SEIA y las recientes normas regresivas han ido desmontando capacidades institucionales. La Ley 31973, que facilita la legalización de deforestación previa y reduce el rol del MINAM, es solo el ejemplo más reciente de una política que debilita la protección de los bosques y contradice el propio Acuerdo Comercial con la Unión Europea”, afirmó.

Guillén advirtió que estas medidas vulneran directamente los artículos 268, 273, 275 y 277 del AC-UE, que obligan al Perú a mantener altos niveles de protección ambiental y evitar retrocesos como incentivo comercial así como incumple el compromiso climático del Perú.

Por su parte, Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), expuso los impactos territoriales del retroceso normativo. *“La Ley 31973 debilita la zonificación forestal, promueve el tráfico de tierras y abre la puerta a economías ilegales. Esto incrementa el riesgo para pueblos indígenas que ya enfrentan invasiones, deforestación y ausencia del Estado. Nada de esto es compatible con los compromisos internacionales del Perú, especialmente con la Unión Europea, que exige trazabilidad, transparencia y sostenibilidad”*, explicó.

Cueto alertó además sobre el contexto de delegación de facultades al Poder Ejecutivo: *“Existe el riesgo de nuevas medidas regresivas que profundicen este patrón de debilitamiento ambiental”*.



Riesgos para el Acuerdo Comercial y preocupación por la Ley APCI

Ana Romero, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), destacó que el Perú está incumpliendo los compromisos ambientales del AC-UE, lo que podría afectar la credibilidad del país ante la Unión Europea.

“El Acuerdo Comercial exige participación ciudadana real, transparencia y altos estándares ambientales. El patrón de retrocesos que estamos viendo no solo vulnera esos compromisos, sino que envía un mensaje muy negativo a la UE. Y si además se restringe el trabajo de sociedad civil a través de normas como la Ley APCI, se pone en riesgo el único mecanismo que tiene la UE para verificar si el Perú está cumpliendo”, señaló.

Romero agregó que el contexto de normas regresivas y amenazas a la vigilancia ciudadana podría agravar tensiones con la UE: *“Si el Perú quiere mantener una relación comercial moderna, debe garantizar que el comercio no avance a costa de los derechos, los bosques y el clima”.*

Las organizaciones advirtieron que el país necesita retomar la ruta del cumplimiento y fortalecer la institucionalidad ambiental para evitar mayores impactos sobre la Amazonía y sobre las comunidades que dependen de ella.

“El futuro de nuestros bosques y nuestra credibilidad internacional están en juego”, concluyó Romero.